



Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

**Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)**

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/>

**Usted es libre de:**



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

**Bajo las condiciones siguientes:**



**Atribución** — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



**No Comercial** — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



**Sin Obras Derivadas** — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

# **Análisis de la amnistía e indulto en el contexto de un proceso de paz en el modelo de justicia transicional\***

## **Amnesty analysis and pardon in the context of a peace process in the transitional justice model**

Karen Milena Díaz Barriga<sup>1\*</sup>

Universidad Católica de Colombia

### **Resumen**

Mediante la implementación del modelo de justicia transicional en países como Sudán del Sur, Irlanda del Norte y Colombia, fue posible ponerle fin a los conflictos armados internos que afectaron a sus respectivos habitantes. Sin embargo, para lograr un proceso de justicia transicional fue necesario la negociación entre los grupos armados al margen de la ley y el Estado de cada país, con el único objetivo de conseguir un estado de paz inmediata y la firma de un acuerdo que garantizara el fin de las hostilidades, el reconocimiento de las víctimas y sus derechos y la situación jurídica de los prisioneros de guerra, entre los que se contempla el otorgamiento de la amnistía e indulto, entre otros puntos de negociación. En diferentes momentos de la historia humana se desarrollaron esas medidas jurídicas que a juicio de los más críticos ocasionaban impunidad. Es por ello que el presente trabajo de investigación plantea si es o no necesaria la aplicación de la amnistía e indulto en la justicia transicional para el establecimiento de la paz en una nación.

**Palabras clave:** Paz; Reconciliación; Amnistía; Indulto; Derechos Humanos; Justicia Transicional; Colombia.

### **Abstract**

By implementing the transitional justice model in countries such as Northern Ireland, South Sudan and Colombia, it was possible to end the internal armed conflicts that affected their respective inhabitants. However, in order to achieve a transitional justice process it was necessary to negotiate with armed groups outside the law and the state, with the sole aim of achieving an immediate state of peace and the signing of an agreement that would ensure the end of hostilities, the recognition of victims and their rights and the legal status of prisoners

---

<sup>1\*</sup> Estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. ([karenmilenadia@outlook.com](mailto:karenmilenadia@outlook.com)) Director Trabajo de Grado. Sergio Andrés Fernández Salas. ([safernandez@ucatolica.edu.co](mailto:safernandez@ucatolica.edu.co))

of war providing for the granting of amnesties and pardons, among other negotiating points. At different times in human history, these legal measures were developed, which in the opinion of the most critical ones caused impunity. That is why the present research paper raises whether or not the application of amnesties and pardons in transitional justice for the establishment of peace in a nation is necessary.

**Key words:** Peace; Reconciliation; Amnesty; Pardon; Human Rights; Transitional Justice; Colombia.

**Sumario. Introducción. 1. Medidas jurídicas: Amnistía e Indulto. 1.1. Concepto de Amnistía: perspectiva de OACNUDH. 1.2. Concepto de Indulto: perspectiva de OACNUDH. 1.3. Acercamiento al estudio de las amnistías e indultos en Sudán del Sur, Irlanda del Norte y Colombia. 1.4. Análisis de la ley de amnistía e indulto para los excombatientes de las FARC-EP. 2. Una breve aproximación al proceso de justicia transicional en Sudán del Sur. 2.1. La punibilidad en el sistema de justicia transicional en Sudán del Sur. 2.2. Los derechos de las víctimas en Sudán del Sur. 3. Una breve aproximación al proceso de Justicia transicional en Irlanda del Norte. 3.1. Celeridad en los procesos judiciales durante la justicia transicional de Irlanda del Norte. 3.2. Los derechos de las víctimas en la justicia transicional en Irlanda del Norte. 4. La implementación de la justicia transicional en Colombia a partir del año 2016. 4.1. La reparación de las víctimas en la justicia transicional en Colombia a partir del año 2016. 4.2. Derecho a la verdad. 4.3. Derecho a la justicia. 5. Los deberes de los Comparecientes y del Estado colombiano. Conclusiones. Referencias.**

## **Introducción**

El sistema de justicia transicional surgió luego de la II Guerra Mundial (Cuervo, Molina, Torres, Casallas, Rodríguez, 2014) el cual tiene como objetivo desarrollar políticas y normas jurídicas que permitan castigar a los responsables de fomentar la guerra y restablecer una sociedad que se encontraba en conflicto, para transformarse en una sociedad pacífica. No obstante, aunque este modelo de justicia se haya presentado en diferentes países, no todos han conseguido un equilibrio entre las sanciones de los agresores y las reparaciones a las víctimas.

La justicia transicional es un mecanismo para ponerle fin a los actos delictivos, abusos y excesos de poder de los agresores dentro de determinado territorio, con el fin de que acepten su culpabilidad ante los Tribunales y las víctimas, para lograr la reconciliación; no sin antes contar con garantías que les permitan obtener un tratamiento especial al reconocer su participación en el conflicto (Sánchez, 2018).

Para el desarrollo de la justicia transicional en Sudán del Sur se implementó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la cual tuvo como prioridad que los agresores manifestaran ante la población y la nación las violaciones que cometieron “con el fin de restaurar la dignidad de las víctimas” (Torres, 2017, p. 60).

En cuanto al proceso de paz de Irlanda del Norte, la población tuvo una participación importante en la consolidación del cese al conflicto armado, este resultó ser duramente criticado, debido a que el proceso de preacuerdo duró casi 10 años; y el cumplimiento del acuerdo para la dejación de armas del grupo armado *Real Irish Republican Army* (en adelante *IRA*) se tardó casi 8 años (Güiza, 2018).

En Colombia, la suscripción del Acuerdo Final de Paz del año 2016, entre el Estado colombiano y el grupo armado al margen de la ley de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP), fue muy bien recibido por los habitantes de las zonas más afectadas por el conflicto armado, también, por las organizaciones internacionales, incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) aceptó el suscrito acuerdo final de paz.

De acuerdo con Cubides y Vivas (2012, p. 83) en la región Latinoamericana encontramos el siguiente fenómeno: “(...) la existencia de grupos guerrilleros nacidos del levantamiento campesino y del descontento social, y Estados contruidos sobre una democracia débil”. Para el caso particular de Colombia, el conflicto armado tuvo origen por la violencia política que pretendió transformar en acción revolucionaria y por la lucha y defensa de los territorios de los campesinos<sup>2</sup> (Saumeth, 2011).

La creación de la Constitución Política de Colombia del año 1991 es en parte consecuencia del movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Este movimiento surgió en el marco de la violencia y la falta de participación

---

<sup>2</sup> Entre las que se encuentran: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Movimiento 19 de abril (M-19).

e inclusión política. Por lo cual fueron importantes los aportes de la Constitución Política de 1991, y el Estado Social de Derecho (Const. 1991, art. 1), a fin de garantizar los estándares mínimos para cada miembro de la población colombiana (Corte Constitucional, Sentencia T 406/1992). Lo que a su vez permitió la desmovilización de algunos grupos al margen de la ley, como el M19, excepto las FARC-EP.

Los diálogos de negociaciones de la paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP se dieron bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, desde el año 2012 hasta el 2016, el cual concluyó con la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, acabando con un conflicto armado interno de más de cincuenta años (Acuerdo Final de Paz, 2016).

Para poner en marcha el componente de justicia a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR), el Acuerdo Final de Paz colombiano adoptó la implementación de las medidas jurídicas de amnistía e indulto por delitos políticos. Luego, el juzgamiento de los excombatientes, como actores políticos alzados en armas contra el Estado es competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El presente trabajo de reflexión jurídico-filosófico, tiene como objeto de estudio el sistema de justicia transicional de los países anteriormente mencionados (Sudán del Sur, Irlanda del Norte y Colombia), así como determinar la importancia de aplicar las medidas jurídicas de amnistía e indulto en el modelo de justicia transicional.

Para desarrollar el presente documento, se busca resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la necesidad de las medidas jurídicas de amnistía e indulto en el contexto de un proceso de paz, en los modelos de justicia transicional? El presente trabajo se desarrollará con el estudio de los procesos de paz de Sudán del Sur, Irlanda del norte y Colombia.

## **1. Medidas jurídicas: amnistía e indulto**

Las medidas jurídicas de amnistía e indulto tienen como objetivo resolver la situación jurídica de los actores involucrados en la confrontación de un conflicto armado no internacional contra el Estado, a través de beneficios o concesiones que este les otorga. Estas medidas son particularmente utilizadas para evitar que el combatiente sea perseguido por

delitos en el marco del conflicto armado, por lo cual deben estar cobijados por el Derecho Internacional Humanitario (Observatorio de paz y conflicto, 2016).

### **1.1. Concepto de amnistía: perspectiva de OACNUDH.**

La palabra “amnistía” se deriva de la palabra griega *amnistía* la cual resulta ser la raíz de la palabra amnesia, por esta razón, se puede entender que cuando el Estado le concede esta medida a un sujeto implicado en un delito, esta persona no tendrá una sanción por su conducta ni habrá un registro que manifieste que cometió determinada conducta constitutiva de un delito (OACNUDH, 2009).

En el modelo de justicia transicional la amnistía es un mecanismo de extinción de la acción penal que se otorga a las partes combatientes en un conflicto con el fin de obtener la confesión de los actos delictivos que realizaron dentro del marco del conflicto. Cabe señalar que la amnistía no procede para graves casos de violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el genocidio) Derecho Internacional Humanitario (Observatorio de paz y conflicto, 2016).

Existen diferentes clases de amnistía, entre las que se encuentran las generales o de Facto, las cuales consisten en:

General: la amnistía general exonera amplias categorías de infractores graves de derechos humanos de enjuiciamiento y/o de responsabilidad civil sin que los beneficiarios tengan que reunir condiciones previas, incluidas las encaminadas a velar por la plena revelación de lo que sepan acerca de crímenes abarcados por la amnistía, en forma individual

De Facto: si bien no excluye expresamente el enjuiciamiento penal o los recursos civiles, un decreto o una reglamentación puede tener el mismo efecto de una ley expresa de amnistía (OACNUDH, 2006, p. 8)

Debido a los grandes conflictos armados, los avances científicos e industriales del siglo XIX y XX, que generaron mayores relaciones y disputas entre los Estados, fue necesaria la creación de las Organizaciones Internacionales que propendieran por la protección de la paz entre las Naciones, para que de esa manera se establecieran mecanismos eficaces que permitieran la terminación de los conflictos armados o políticos. Así entonces, fue necesario que los conflictos se humanizaran y con ello se reconoció el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Derechos Humanos y

los diferentes mecanismos para la protección de estos, junto con el Sistema Universal de Derechos Humanos regido por la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, para respetar los postulados reconocidos después de la segunda mitad del siglo XX, los Estados que firmaron las convenciones que los hacen parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, y necesiten conceder amnistías e indultos deben garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional, en tal caso no deben los Estados realizar lo siguiente:

- a) Impedir el enjuiciamiento de personas que pueden resultar penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos, incluidos los delitos que afecten concretamente a la mujer y la violencia de género;
- b) Interferir con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida la reparación, o
- c) Limitar el derecho de las víctimas y las sociedades a conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario. Además, la amnistía que procure restaurar los derechos humanos deben estar formuladas con miras a velar por no limitar los derechos restaurados ni perpetuar en algún sentido las violaciones iniciales (OACNUDH, 2006, p. 11).

### **1.2. Concepto de indulto: perspectiva de OACNUDH.**

Su propósito es que el sujeto que haya sido condenado por la comisión de un delito no deba pagar la condena impuesta por la decisión del juez. Sin embargo, distinto a como sucede con la amnistía esta sí puede registrarse en la base de datos de la administración judicial (OACNUDH, 2009).

Un ejemplo de aplicación del indulto es la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902) el cual fue un conflicto armado civil provocado principalmente por la inestabilidad política. Cuando se encontraba en la fase de terminación, el Estado otorgó el indulto para aquellas personas que entregaran sus armas, así como el retiro de las filas del grupo armado al margen de la ley (Guerrero, 2004).

La amnistía y el indulto han sido utilizados en la historia colombiana desde 1820, después de dos siglos es posible determinar que, en los diferentes Gobiernos de turno, se han expedido 25 amnistías y 63 indultos (Aguilera, s.f.). Estas medidas jurídicas han sido utilizadas al

inicio y fin de los procesos de paz que se realizaron entre un determinado Gobierno y los grupos armados al margen de la ley, lo anterior, por cuanto en una negociación, resulta ser útil que cada una de las partes pueda aportar algo para la resolución del conflicto. (Aguilera, s.f.).

### **1.3. Acercamiento al estudio de las amnistías e indultos en Sudán del Sur, Irlanda del Norte y Colombia**

En el caso de Sudán del Sur, Irlanda del Norte y Colombia, los Gobiernos Nacionales han permitido la implementación de la amnistía y el indulto. Colombia adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos la cual concede competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) para conocer sobre la vulneración de los derechos humanos que se cometan en su territorio. En virtud de dicha competencia, reconocida por Colombia a la Corte IDH, el Estado se comprometió a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Convención. Por lo tanto, la población colombiana no sólo cuenta con las autoridades judiciales domésticas para denunciar los hechos cometidos, sino que también encuentra un sistema internacional que observa objetivamente la protección del Estado sobre los mencionados derechos. El artículo 33 de la Convención consagra:

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados, parte en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

El desarrollo de la justicia transicional en Colombia debe encontrarse acorde a los parámetros establecidos en el Estatuto de Roma, especialmente en el preámbulo sobre el deber de investigación penal de los Estados, así como la Resolución 60/147 de la ONU y el desarrollo de la Ley 975 de 2004 y Ley 1448 de 2011. De la misma manera, lo consagrado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre la protección a los derechos de las víctimas, la regulación de la amnistía e indulto y el juzgamiento a los agresores (Cubides, Barreto y Fajardo, 2018).

Por lo anterior, si un Estado por medio de la firma de tratados o convenciones internacionales hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante



SIDH), y el Estado está involucrado en un conflicto armado no internacional, no es obligación la implementación del modelo de justicia transicional para negociar las posibles condenas a los victimarios. Así entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos participará activamente en la resolución del conflicto buscando la protección y defensa de los derechos humanos de la población, pero en especial de aquella población víctima del conflicto armado.

#### **1.4. Análisis de la ley de amnistía e indulto para los excombatientes de las FARC-EP**

La implementación de las medidas jurídicas de amnistía e indulto (Ley 1820 de 2016) fue fundamental en la negociación del proceso de paz para dar el gran paso a la etapa del postacuerdo. Con la sanción de esta ley se presentaron dos clases de amnistía: una general y la otra avalada por la Corte Constitucional por delitos más graves:

(...) La amnistía general o de iure, que expía los delitos políticos y conexos tales como rebelión, asonada o uso ilegal de uniformes, conductas en las que están incursos la mayoría de los guerrilleros (Ley 1820, 2016, art. 15).

(...) El otro nivel de amnistía e indulto avalado por la Corte Constitucional, tiene que ver con delitos más graves, pero conexos con el conflicto, como pudieron ser el de narcotráfico (Min. Justicia, s.f)

En el caso de la amnistía de iure esta podrá ser otorgada por los jueces penales con función de conocimiento o juez de ejecución de penas con la autorización del Gobierno Nacional (Congreso de la República de Colombia, Ley 1820 de 2016, art. 19). Para solicitar la amnistía o el indulto, los excombatientes deberán dirigirse a la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien por competencia es la encargada de resolver dicha situación jurídica. Junto con la concesión de esta amnistía existe un requisito posterior, en donde quien se beneficia de la misma debe participar en la reparación de las víctimas en los próximos 5 años desde la concesión, so pena de perder el derecho de que le sean aplicables las sanciones dispuestas por la jurisdicción especial para la paz (Ley 1820 de 2016, art. 14). Producto de este tipo de requisitos se amplió la amnistía de iure en el decreto 277 de 2017 en donde además de los procedimientos establecidos en cuanto al otorgamiento de la amnistía en el artículo 7 se habla del acta de compromiso en casos de amnistía de iure, la cual complementa lo descrito en el requisito dispuesto en el artículo 14 de la ley 1820 de 2016.

Por lo tanto, al realizar el estudio de los principios de la integralidad y de la prevalencia establecidos en el SIVJNR, se observa lo siguiente: el principio de integralidad tiene como fin lograr una paz estable y duradera, a través del reconocimiento y la satisfacción de los derechos de las víctimas, con la aplicación de las medidas del SIVJNR, las cuales incluyen la amnistía y el indulto, con estas medidas se brindará seguridad jurídica y facilitará la terminación del conflicto (Ley 1820 de 2016, art. 6).

En cuanto al principio de la prevalencia, el SIVJNR refiere que la amnistía, el indulto y los tratamientos penales especiales tienen una posición jerárquica superior a lo decidido por las otras jurisdicciones cuando se llegue a proferir decisión alguna sobre los excombatientes. Lo anterior tiene el propósito de garantizar seguridad jurídica, la reinserción a la vida civil e igualdad ante la ley a los excombatientes.

Los principios mencionados resultan ser los más importantes en el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz por cuanto su dirección se encuentra encaminada a la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto y al establecimiento de igualdad jurídica de los excombatientes, puesto que el acuerdo establece la adopción de obligaciones de las partes, el Estado colombiano y las FARC-EP.

Además de los principios mencionados, los efectos de la amnistía e indultos son presentados de manera clara y expresa en el artículo 41 de la ley 1820 de 2016 donde “La amnistía extingue la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas”. Es decir, Una vez en firme, la amnistía hace tránsito a cosa juzgada y sólo podrá ser revisada por el Tribunal para la Paz. La amnistía extingue la acción, la responsabilidad y la sanción penal. Si la persona amnistiada está privada de la libertad, debe ser puesta en libertad de manera inmediata y definitiva.

Otro aspecto relevante de la Ley 1820 es el tratamiento diferenciado entre las FARC y los agentes del Estado (Artículos 2, 3 y 9), con fundamento en el cual se prevé la amnistía para los primeros (Artículo 17) y la renuncia a la persecución penal para los segundos (Artículos 44-ss). Respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario. Dicho tratamiento diferenciado valorará lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública en

relación con el DIH. Los agentes del Estado no podrán ser amnistiados o indultados porque la Constitución autoriza la aplicación de esta medida a los responsables de los delitos políticos y conexos con éstos, y en el entendido que los agentes del Estado no pueden cometer esta clase de delitos, no pueden ser objeto de estas medidas. Además de ello, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz será la encargada, de oficio o a solicitud del interesado, de aplicar en cada caso y luego de examinar los hechos y las pruebas correspondientes, los mecanismos de resolución definitiva de situación jurídica para los Agentes del Estado, entre ellos la renuncia a la persecución penal. La Sala deberá establecer si se trata de un delito susceptible de renuncia a la persecución penal o de un delito excluido como los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Ahora bien, un tema fundamental de la Ley de Amnistía, es la distinción entre delitos amnistiables y no amnistiables. Su Artículo 23 es una de las normas centrales, tal vez la más importante con respecto al tema de la “amnistiabilidad” de las conductas. Dice lo siguiente:

Artículo 23. Criterios de conexidad. La Sala de Amnistía e Indulto concederá las amnistías por los delitos políticos o conexos. En todo caso, se entienden conexos con el delito político los delitos que reúnan alguno de los siguientes criterios: a) Aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares, o b) Aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente, o c) Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. La Sala de Amnistía e Indulto determinará la conexidad con el delito político caso a caso.

Parágrafo. En ningún caso serán objeto de amnistía o indulto únicamente los delitos que correspondan a las conductas siguientes: a) Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del

reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiabiles; b) Los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, es decir, aquellos que no hayan sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero.

Por consiguiente, quedarían claros los puntos más importantes tomados por la ley de amnistías e indultos dando paso a la revisión de la temática en el derecho comparado tal y como se definió en el contenido del presente documento con aras de definir las similitudes y diferencias en los distintos procesos de paz.

## **2. Una breve aproximación al proceso de justicia transicional en Sudán del Sur:**

Sudán del Sur es uno de los Estados más jóvenes en el mundo, puesto que proclamó su independencia de Sudán en julio de 2011 y se convirtió en el país miembro 193° de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) (CICR, s.f.). A pesar de la independencia, el país tuvo diferentes disputas por el poder político, lo que conllevó a una guerra civil. Un resultado contraproducente debido a que las partes involucradas buscaron la paz durante un conflicto de más de 30 años. De esta manera, no se encontraba estabilidad para la estructuración del Estado, los antiguos aliados que se enfrentaron para independizarse se encontraban en disputas por el control del mismo.

La adopción del modelo de justicia transicional se inició en este país a partir del acuerdo de Addis Abeba de 2015 o también conocido como “*Agreement on the Resolution of the conflict in the Republic of South Sudan*”. Sin embargo, en la adopción del modelo, de justicia transicional en este país, se presentó retraso al establecer las instituciones de este modelo que contemplaba la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Curación. Para este trabajo es posible deducir que la población se vio afectada en la implementación del modelo de justicia transicional, dado que lo que afectó el cumplimiento a la justicia de las víctimas del conflicto armado, fue por causa de la Unión Africana en la demora para cumplir con la obligación de establecer una corte independiente que diera por terminado el conflicto y la impunidad del país de Sudán del Sur.

La falta de credibilidad en las instituciones estatales, la corrupción y el despotismo, no permitieron que se consolidaran efectivamente los postulados del acuerdo de paz, causando la vulneración de los derechos de la población sursudanesa. Sus dirigentes políticos acordaron un acuerdo de paz entre estos y no entre la población, lo que generó que con el cambio de cada Gobierno no permitiera que existiera una efectiva materialización de la democracia (Díez, 2016).

En cuanto a la Comunidad Internacional, no fue mucho lo que pudo hacer por este país, dado que aún no se proclamaba como un Estado de Derecho, y era necesario para buscar el respeto de la soberanía estatal y respaldo de las organizaciones internacionales para que pudiera intervenir activamente en el desarrollo del modelo de la justicia transicional (Scott, 2016).

Los dirigentes de las naciones como la sursudanesa, poseían un amplio poder sin límites, que conllevó a la vulneración de los derechos de su población (Londoño, 2007). Por lo cual resultaba necesario un Estado de Derecho que brindara una garantía mínima para los estándares de supervivencia.

Todos los acuerdos de paz contienen elementos similares que permiten la construcción de los pilares para garantizar una paz estable y duradera, es así como el jurista Díez, (2016), presenta los elementos clave del acuerdo sursudanés:

Elementos clave del Acuerdo de Paz para Sudán del Sur (Agosto 2015)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno de transición de unidad nacional, establecido 90 días después de firmar el acuerdo.</li> <li>• Período de transición de 30 meses, con elecciones nacionales 60 días antes de su conclusión.</li> <li>• Kiir, presidente en período transitorio; y el primer vicepresidente, seleccionado por la oposición armada.</li> <li>• A nivel nacional, distribución de los Ministerios: Gobierno de Sudán del Sur, 53%; oposición armada, 33 %; ex detenidos, 7 %; y otros partidos políticos, 7 %.</li> <li>• En Estados de Unidad, Alto Nilo y Jonglei, distribución del Consejo Estatal: Gobierno, 46%; oposición armada, 40% por ciento; ex detenidos, 7%; y otros partidos políticos, 7%.</li> <li>• En los siete estados restantes, distribución del Consejo Estatal: Gobierno, 85%; y oposición armada, 15%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juba: zona desmilitarizada, excepto guardia presidencial, fuerzas de protección de cuarteles militares y policía integradas conjuntas.</li> <li>• Instauración Comisión de Seguimiento y Evaluación formada por las partes en Sudán y representantes de la IGAD Plus.</li> <li>• Creación de un tribunal mixto para Sudán del Sur para investigar y procesar a las personas acusadas de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional, desde el 15 de diciembre de 2013 hasta la finalización del período transitorio.</li> <li>• Establecimiento de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación, para establecer un registro de violaciones de los derechos humanos y el estado de derecho entre julio de 2005 (es decir, cuando se estableció la región autónoma del sur de Sudán) y la fecha de la firma del acuerdo.</li> </ul>

*Figura 1: Elementos clave del acuerdo de paz Para Sudán del Sur (Díez, 2016, p. 5).*

Del análisis de los siguientes elementos, la investigación observa que el Estado buscó la realización de actividades que le permitieran al nuevo Estado configurarse como un Estado de Derecho; lo cual permite que el Gobierno, la oposición y los demás partidos políticos mantuvieran un ejercicio del poder equitativo, garantizando que la actividad del poder político no se centrara en una sola fracción de estas, sino que existiera una equivalencia efectiva.

## **2.1. La punibilidad en el sistema de justicia transicional en Sudán del Sur**

La investigación observó, al finalizar el anterior eje temático, que el Estado pactó la adopción de un Tribunal mixto; el cual tendría a cargo la investigación y el juzgamiento de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y otras violaciones a normas de derecho internacional, desde el 15 de diciembre de 2013 hasta el fin del período transitorio.

El artículo 3.5 del acuerdo de Addis Abeba de 2015 consagra la responsabilidad y las sanciones que deben tener los victimarios en el conflicto armado, y en el artículo 3.5.1 explica la calidad de los sujetos de las sanciones:

A person who planned, instigated, ordered, committed, aided and abetted conspired or participated in a joint criminal enterprise in the planning, preparation or execution of a crime referred to in Chapter V, article 3.2.1 of this Agreement shall be individually responsible for the crime<sup>3</sup>.

El acuerdo manifiesta cuáles son los delitos que conocerá el Tribunal:

3.2.1.1 Genocide;

3.2.1.2 Crimes Against Humanity;

3.2.1.3 War Crimes

3.2.1.4 Other serious crimes under international law and relevant laws of the Republic of South Sudan including gender-based crimes and sexual violence.

(Chapter V, article 3.2.1)<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Traducción hecha por la autora: Una persona que planeó, instigó, ordenó, cometió, ayudó e inspiró o participó en una empresa criminal conjunta en la planificación, preparación o ejecución de un delito mencionado en el Capítulo V, artículo 3.2.1 de este Acuerdo será individualmente responsable del delito.

<sup>4</sup>Traducción hecha por la autora: 3.2.1.1 Genocidio; 3.2.1.2 Crímenes contra la humanidad; 3.2.1.3 Crímenes de guerra; 3.2.1.4 Otros delitos serios de derecho internacional y las leyes pertinentes de la República de Sudán del Sur, incluidos los crímenes de género y de violencia sexual.



A pesar que el acuerdo de paz haya manifestado diferentes mecanismos para garantizar la defensa y promoción de los derechos de las víctimas del conflicto, en el informe de la organización Amnistía Internacional, de octubre de 2019, manifiesta que las autoridades de Sudán del Sur permitieron la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no fueron investigados en su totalidad, otorgando como cifra un solo caso juzgado (Amnistía Internacional, 2019). Una de las razones para que no exista un correcto ejercicio en la administración de justicia es la intervención del poder ejecutivo en las decisiones que debe tomar el poder judicial. Además, se encuentra que la instauración de la Alta Corte para Sudán del Sur (en inglés HCSS) no se ha realizado como lo proyectaba el acuerdo de paz, así que las garantías de defensa de los derechos de las víctimas resultan inoperantes (Amnistía Internacional, 2019).

## **2.2. Los derechos de las víctimas en Sudán del Sur**

El acuerdo manifestó que los órganos partícipes en la consolidación de la justicia transicional debían crear mecanismos que los protegieran, sin especificar cuáles pueden ser. En ese sentido, en el punto 2.4 y 2.4.1, establece:

The CTRH shall implement measures to protect victims and witnesses, in particular, youth, women and children. Such protection measures shall include, but shall not be limited to the conduct of in camera proceedings and the protection of the identity of a victim or witness<sup>5</sup>

De acuerdo con lo anterior, el CTRH es la Comisión para la Verdad, la Reconciliación y la Reparación, en virtud del cual las víctimas cuentan con los derechos de la verdad, la reconciliación y la reparación, debido a que uno de los deberes de esta comisión es la implementación de prácticas que le permitan a la población víctima ser reparada por sus derechos vulnerados (Acuerdo Addis Abeba, 2015, art. 2.2 y 2.2.1)

Para garantizar los derechos de las víctimas, diversas organizaciones internacionales como la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur, publicó un informe que decía que el Gobierno y la oposición fueron actores en la comisión de crímenes contra la humanidad y de guerra, durante el conflicto armado entre 2013 y 2015. Debido a que se

---

<sup>5</sup>Traducción hecha por la autora: El CTRH aplicará medidas para proteger a las víctimas y testigos, en particular, a los jóvenes, las mujeres y los niños. Dichas medidas de protección incluirán, pero no se limitarán a la realización de procedimientos en cámara y a la protección de la identidad de una víctima o testigo.

expresó la responsabilidad del Estado, ocasionó que la comunidad africana (la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur) tuviese competencia para conocer sobre los delitos cometidos (Observatorio de Justicia Transicional, 2015).

Entre los problemas que surgieron en cuanto a la garantía del sistema judicial en la nación, se presentó que, durante el año de 2013, el presidente Salva Kiir, concedió indiscriminadamente amnistías e indultos a miembros del ejército (Alba, Suarez y Jaramillo, 2016). Es posible deducir que Salva Kiir vulneró los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, dado que estos miembros del ejército no cumplieron con los mecanismos del acuerdo, lo que no permitió la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el acuerdo de paz mediante la Alta Corte de Sudán del Sur.

La investigación deduce que la aprobación de las amnistías e indultos ocasionó que la población no se sintiera protegida por el Estado, al contrario, se sintieron expuestos y afectados en sus derechos. De la experiencia del país sursudanés la investigación propone que la respuesta a la terminación de un conflicto armado no son las amnistías e indultos concedidos, sino la satisfacción en la protección y defensa de los derechos de las víctimas.

### **3. Una breve aproximación al proceso de Justicia transicional en Irlanda del Norte a justicia transicional en Irlanda del Norte**

El conflicto armado en Irlanda del Norte ha sido uno de los más longevos en el mundo, por cuanto las disputas se originaron a inicios del siglo XX y estallaron durante la década de 1960. Una de las razones del conflicto se dio porque parte de la población irlandés profesaba la religión católica, siendo entonces discriminados y ocasionando afectaciones a sus derechos humanos debido a que la mayoría de los irlandeses eran protestantes. Otra de las causas del conflicto fue la búsqueda del territorio irlandés, y no como se estableció en los últimos siglos: que el Reino Unido poseía una porción de dicho territorio, sino que surgiera el desconocimiento de la población irlandesa de sus raíces (Méndez, 2004).

El motivo por el cual una nación quiere realizar un acuerdo de paz generalmente surge por estar en un conflicto armado que lleva determinado tiempo, que no permita la conciliación entre las partes principales del conflicto y que presente un incremento en situaciones de conflicto. Lo que lleva a la población a conformar una organización o partido político que esté en pro de la paz para establecer la economía y la justicia en el país (Mansergh, 2001).



Es importante el estudio del proceso de paz irlandés, porque este se empezó a desarrollar desde 1987 con los primeros acercamientos para la iniciativa de paz hasta la firma del Acuerdo de Belfast de 1998 (Mantilla, 2014). Durante un largo tiempo las partes involucradas en el conflicto mantuvieron relaciones de comunicación para poder llegar a un acuerdo que permitiera la paz en el territorio.

A inicios de la década de los años 90 se realizaron los primeros acercamientos para un acuerdo de paz. Sin embargo, algunos partidos políticos como el Partido Unionista Democrático, tenía sus reservas porque sostenían que al Gobierno de Irlanda del Norte no se le podía dar participación en la negociación (Dodds, 2001). Entre los antecedentes que se presentan al Acuerdo de Belfast, se encuentra la declaración '*Downing Street*' el cual se consagró en 1993 donde el Estado invitó a la participación del sector político del IRA (Ejército Republicano Irlandés)<sup>6</sup> en la negociación para la terminación del conflicto armado con la condición de no presentar ninguna agresión; esta declaración permitió que durante ocho meses se mantuviese un alto al fuego (ABC internacional, 2009)

El Acuerdo de Belfast, fue firmado el 9 de abril de 1998, las negociaciones duraron 21 meses sancionado, en este, Irlanda del Norte buscó la igualdad y la satisfacción de los derechos de las partes. En el acuerdo se encontraba la intención de los grupos involucrados de obtener una ventaja sobre el otro, sin embargo, fueron las presidencias independientes las que lograron efectivizar las negociaciones a través de diferentes mecanismos de inclusión y participación de la población (González, 2015). La euforia presentada por los partidos políticos se dio porque estos no empezaron a realizar céleremente las diferentes disposiciones del acuerdo, lo que generaba tensiones interpartidistas que no mantenían la fortaleza del acuerdo, sin embargo, con el paso del tiempo estas disminuyeron (Gago, 2016).

El acuerdo contempló algunos órganos que permitieron la obligatoriedad del cumplimiento del mismo, con el fin de poder avanzar en la construcción de un Estado con una paz estable, y que de esa manera no se volviera a encontrar involucrado en conflictos armados que llegaran a afectar esta estabilidad. De esa manera se presentan los siguientes órganos:

---

<sup>6</sup>Esta fue una de las guerrillas que lideró entre 1972 y 1999 el conflicto armado contra el Reino Unido para que de esa manera se estableciera la independencia del territorio irlandés.

- Asamblea de Irlanda del Norte: Esta asamblea tenía como atribuciones de carácter legislativo los temas de: medio ambiente, desarrollo económico, educación y servicios sociales, entre otros.
- Consejo Ministerial Norte – Sur: Tenía como función el realizar un acercamiento a ambas Irlandas (Norte y Sur) con el objetivo de mantener comunicaciones estrechas.
- Consejo Británico Irlandés: Este tenía como función mantener las relaciones del Reino Unido durante el proceso, limitando las actuaciones que llegase a generar el Consejo Ministerial Norte – Sur, por el temor a que las dos Irlandas se unificarán (Mantilla, 2014).

El modelo de justicia transicional que se presentó en Irlanda del Norte contaba con dos variables: la primera con la reparación de las víctimas, las cuales después de una votación escogieron el reconocimiento con una ayuda material, proyectos conmemorativos y con la figura del defensor para orientar a las víctimas en su reclamación. La segunda consistió en una Comisión de la Verdad, la cual nunca fue creada porque un grupo de la población, los Unionistas, no estaban de acuerdo con estas investigaciones dado que no tenían el interés real de mantener el acuerdo de paz (Mantilla, 2014). Sin embargo, el acuerdo de Irlanda del Norte se logró con la ayuda de la Unión Europea, Estados Unidos de América y diferentes organizaciones internacionales.

### **3.1. Celeridad en los procesos judiciales durante la justicia transicional de Irlanda del Norte**

El tiempo es una de las mayores dificultades por las que pasa un Estado para llegar a un acuerdo de paz, aunque se fijan tiempos para la negociación y el posconflicto. En el caso norirlandés, el preacuerdo de paz empezó en 1987, durante los años siguientes las partes involucradas negociaron el acuerdo ‘*Downing Street*’, el cual produjo una temporada sin violencia, cuando se volvieron a presentar actos violentos, así entonces, Irlanda del Norte prolongó nuevamente la negociación, finalmente en 1998, se negoció el acuerdo de Belfast, lo que ocasionó que en este territorio se diera inicio a la época del posacuerdo. En este punto se puede observar cómo el Estado tomó las precauciones necesarias para la entrada de un acuerdo de paz que beneficiaría a las partes del conflicto.

El acuerdo de Belfast recogía las medidas correspondientes para la transición de la paz, las cuales fueron: la liberación de los procesos pertenecientes a grupos armados paramilitares,

el decomiso de las armas del IRA y de los otros grupos lealistas, la reforma de la policía norirlandesa y la retirada de las tropas británicas (Universidad Eafit, 2017). Sin embargo, la dejación de armas por parte del IRA no fue como se planteó en el acuerdo, puesto que entre sus puntos se encontraba que esta dejación de armas se daría en el periodo de dos años por parte de las fuerzas paramilitares (Monroy, 2017 citando a Sierra, 1999), lo cual generó que una de las facciones del grupo de los unionistas renunciara al acuerdo de paz. Con este precedente el Reino Unido impuso el mandato directo de su legislación con el objetivo de llegar a buenos términos el acuerdo. Sin embargo, el IRA manifestó que era necesaria la implementación de una comisión internacional que supervisará dicha dejación de armas, lo que le permitió al Reino Unido devolver el poder a la Asamblea norirlandesa (Universidad Eafit, 2017).

Para la protección de los derechos de las víctimas se encuentra el principio de celeridad, el cual propende por obtener reparación a las víctimas en un término razonable; igualmente la dejación de armas por parte de los grupos al margen de la ley: para proteger el acuerdo, la creación de comisiones que verifiquen el proceso de paz y la conformación de los Tribunales que administren justicia, con el fin de reducir la posibilidad que vuelva a generarse el conflicto armado (García, 2018).

Salazar (2017) citando a la embajadora de Irlanda del Norte en 2017, la jurista Sonja Ann Hyland, expresa que:

Se firmó el acuerdo en 1998, pero durante muchos años, desde ese momento hasta hoy, hemos visto que parte de los acuerdos se están implementando y parte no. No era firmar el acuerdo, implementarlo y dos o tres años después todo estaba bien, no, la implementación todavía está en proceso (Salazar, 2017).

La celeridad es entonces un principio que no siempre será posible realizar en el marco de un proceso de justicia transicional, porque, aunque las partes involucradas en el conflicto estén de acuerdo con la resolución de este, la materialización de lo acordado está en muchas ocasiones fuera del alcance del Estado o del grupo rebelde.

### **3.2. Los derechos de las víctimas en la justicia transicional en Irlanda del Norte**

El reconocimiento de las víctimas es una parte fundamental en cualquier proceso de paz, razón por la cual, les permite ser una parte activa en el proceso. En Irlanda del Norte el

reconocimiento de las víctimas y reparación estuvo a cargo de la Secretaría de Estado de Irlanda del Norte de ese entonces, la cual nombró a Kenneth Bloomberg como el coordinador en la realización de una convocatoria con el objetivo de interactuar con las víctimas (Monroy, 2017). Por lo anterior, el acuerdo de Belfast indicó la necesidad de reconocer el sufrimiento y el dolor de las víctimas con el fin de establecer un proceso de paz que las reparara por la afectación recibida (González, 2015).

Para mejorar las condiciones de vida de la población las partes manifestaron en el acuerdo de Belfast que reconocerían y respetarían las diferencias culturales y políticas, con el fin de garantizar los derechos humanos y para propender por la reconciliación (Herrera y Bello, 2010).

En el punto de *Reconciliation and Victims of Violence* del acuerdo de Belfast (1998) se consagra que las víctimas tienen derecho a recordar, así como a contribuir en una sociedad cambiada, el derecho a la reparación simbólica mediante un monumento y el auxilio económico de aquellos que logren ser identificados como víctimas (Caira, 2007). Sin embargo, en el informe presentado por la Comisión de Víctimas, observó que las víctimas veían a la comisión como un “ejercicio cosmético” no confiaban en su poder, entendieron que el único medio para ser reparados sería mediante la verdad y la justicia (Martín y Páez, 2000).

A pesar de la exigencia del principio de justicia como mecanismo y derecho de las víctimas, el Estado no ha cumplido el acuerdo de Belfast: puesto que una de las dificultades que tuvo este proceso resultó ser la terminación de la investigación de los crímenes cometidos desde 1960 (García, 2018). En el año 2013 el Fiscal General de Irlanda del Norte, John Larkin, realizó la petición de dar fin a las investigaciones por los homicidios ocurridos hace 30 años (Amnistía Internacional, 2013). Con esta petición se evidenció la falta de garantías judiciales para las víctimas del conflicto armado, lo cual condujo a que ninguna persona fuese investigada ni sancionada, puesto que al sancionar el acuerdo de Belfast uno de sus artículos consagra la liberación de los prisioneros por el delito de homicidio cuando hicieran parte de una de las partes del conflicto.

#### **4. La implementación de la justicia transicional en Colombia a partir del año 2016**

En un principio, la implementación del modelo de justicia transicional en Colombia no cumplió con los requisitos necesarios para adecuarlo al ordenamiento jurídico. Lo anterior,

dado que regularmente se utilizaba cuando un Estado se encontraba en permanentes violaciones a los derechos humanos por un fenómeno jurídico, social y político, generalmente asociado con los regímenes dictatoriales (Cáceres, 2013). El jurista Rodrigo Uprimny, citado por Sixta Zúñiga, interpreta el concepto de justicia transicional con énfasis en la transformación del orden social y político de un Estado por causa de la finalización de un conflicto interno armado hacia la paz (Flórez, Luna y Perona, 2019). Con los cimientos de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, se estructuró la justicia transicional, y a su vez permitió el reconocimiento de la población víctima del conflicto armado que no se había logrado anteriormente (Sánchez, 2018).

Cuando un Estado tiene contemplado establecer un sistema de justicia transicional se encuentra con dificultades jurídicas (nacional e internacionalmente), sociales y culturales, de los cuales se pueden encontrar:

- El equilibrio de la negociación mientras se está en un conflicto armado
- Las garantías que exigen las partes para finalizar el conflicto
- Que las garantías exigidas sean compatibles con las obligaciones internacionales que adquirió el Estado (Nash, 2018).

Los anteriores enunciados nos recuerdan el proceso de paz norirlandés, donde se establecieron acuerdos de no agresión para tener la certeza de las partes en su interés por la paz (aunque previo a ese momento y posterior continuaban en un conflicto bélico). A su vez el conflicto en Sudán del Sur, en el cual la disputa por el poder continuaba, se desarrolló un acuerdo de paz con todos los puntos clave, aunque la sociedad no estaba condicionada para ello. Lo mismo sucedió en el acuerdo final de paz colombiano del año 2016 con las FARC-EP, para continuar con el proceso de negociación se pactó entre el Estado colombiano y las FARC-EP el cese al fuego, lo que dio garantías a la negociación.

Como antecedente del acuerdo de paz con las FARC-EP se encuentra el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante AUC) el cual fue emprendido por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2005 bajo la Ley 975. De esta manera la legislación permitió la apertura del sistema de justicia transicional que se encuentra en: i) la Ley 1448 de 2011 que tiene como objetivo la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto y ii) de forma complementaria se encuentra el comunicado conjunto 60 de la Mesa de Conversaciones (Tirado y Ramírez, 2016).

Es posible corroborar que la Ley 975 de 2005 cumplió con los estándares mínimos considerados para la aplicación de la justicia transicional donde los desmovilizados debían entregar sus armas, confesar sus delitos, reparar a las víctimas y la única compensación que tendrían sería la disminución de sus condenas (Barón, 2018).

La Ley 1448 de 2011, en su artículo 1° señala que: “tiene como objetivo la atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto” algunos de los principios más importantes son:

Dignidad, principio de buena fe, igualdad, garantía del debido proceso, justicia transicional, condenas con subsidiariedad, coherencia externa, coherencia interna, enfoque diferencial, participación conjunta, respeto mutuo, obligación de sancionar a los responsables, progresividad, gratuidad, sostenibilidad, principio de prohibición de doble reparación y de compensación, principio de complementariedad, acción de repetición y subrogación, derecho a la verdad, justicia y reparación integral (Barón, 2018, p. 545).

Aún con la mención literal de justicia transicional y los derechos mencionados, estos principios buscan regir las actuaciones que debe realizar la administración de justicia, para que de esa manera exista una igualdad ante la ley (tanto material como formal) y que las víctimas puedan ser reparadas. El Congreso de la República colombiano desarrolló desde 1993 las leyes que permitieron articular el establecimiento de la paz: por ejemplo, con la Ley 104 de 1993 el Congreso le otorgó facultades al presidente de la República para que pudiese entablar conversaciones con los grupos armados al margen de la ley, para negociar su reintegración a la vida civil y alcanzar la paz (Vallejo, 2015).

Debido a que el conflicto armado colombiano, no tiene similitud alguna con los vistos anteriormente, el desarrollo del modelo de justicia transicional resulta ser innovador, por cuanto se buscó un acuerdo de paz con una de las guerrillas más antiguas del continente, desarrollando un Sistema de Verdad Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, aun cuando se mantiene un conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los rezagos de las AUC.

Las garantías que exigen las partes son una ardua labor porque es necesario establecer la justicia como un pilar en el proceso de paz (Vélez, 2015). Deben existir límites a las

solicitudes de amnistías e indultos, los cuales se encuentran en el tercer punto de las obligaciones adquiridas con los organismos internacionales que permiten su aplicación. Puesto que de llegar a ser una amnistía e indulto general como ocurrió en Sudán del Sur en el 2013 o la no realización de las investigaciones como en el caso de Irlanda del norte, se presentaría una inestabilidad jurídica que podría escalar un conflicto mayor.

En el contexto colombiano hubo discusiones en el proceso sobre cuál “es el rol y el alcance de la respuesta penal frente a los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado” (Nash, 2018, p. 21). Puesto que las actuaciones de la antigua guerrilla FARC-EP podían estar argumentadas bajo la comisión de delitos políticos para apoyar su causa, de esa manera se entendía como “defendida” (Farc ep, s.f.). Sin embargo, el Estado determinó que algunas de las acciones de la antigua guerrilla FARC-EP, afectaron los derechos humanos de la población reiterativamente infringiendo el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos como instrumentos jurídicos internacionales que han sido ratificados por el Estado y las normas internas colombianas (Ley 1820 de 2016, art. 16).

#### **4.1. La reparación de las víctimas en la justicia transicional después del año 2016**

En el marco de estudio del presente trabajo, es importante analizar la reparación de las víctimas, toda vez que como se indicó anteriormente en la ley de amnistías e indultos es un requisito para mantener la amnistía el contribuir con la reparación de las víctimas la cual se da por medio de la justicia y la verdad, ítems que serán desarrollados para un mejor entendimiento de los deberes que tienen los beneficiados con la amnistía e indulto en medio de un proceso de paz.

El cumplimiento de las normas de Derecho Internacional sobre derechos humanos ratificadas en Colombia, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo de San Salvador, entre otros, así como el cumplimiento de la normatividad local por parte de un Estado, permite mayor estabilidad política en su territorio, generando una mayor confianza de la población hacia sus dirigentes políticos<sup>7</sup>, así que, al encontrarse protegido por dicha

---

<sup>7</sup> Esto debido a que como lo explicó Thomas Hobbes en su obra *el Leviatán*, el Estado es un monstruo que tiene el ejercicio de poder sobre los derechos de su población, sin embargo, es esta misma

legislación internacional, garantiza la protección efectiva a su población y la reparación para las víctimas (Zambrano, 2016).

La reparación de las víctimas es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas, el sujeto que llegase a vulnerar el derecho de otro, tendrá la obligación de repararlo (Corte Constitucional, Sentencia C 715/12). Luego, entonces se encuentra la siguiente definición de reparación: “es la manera como el responsable cumple la obligación de reparar asegurando a la víctima el retorno al estatus quo ante el acaecimiento del daño” (Henao, 2015, p 286).

Para el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, el Estado estableció la reparación integral de las víctimas con el objetivo de reconocer el daño causado a la población y al medio ambiente, la reparación consistía en contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida, brindando garantías y derechos de las víctimas, por lo cual se estipularon 5 etapas a la reparación integral las cuales son: medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, Restitución, Garantías de no repetición, Indemnización administrativa (Unidad de Víctimas, s.f.).

Para que una persona fuese reconocida como víctima, de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, debía haber sufrido un daño individual como consecuencia de las “acciones que hayan transgredido la legislación penal por grupos armados al margen de la ley” (Congreso de la República, Ley 975 de 2005, art. 5). Esta delimitación provocó la discriminación del pueblo, dado que no contemplaba las agresiones hacia un individuo o un colectivo por parte de los funcionarios del Estado, lo cual permite entender que se presenta el caso de una ‘inmunidad’ o una ‘afectación’ al ejercicio efectivo de la defensa de los derechos de las víctimas, por cuanto, se conoce que dentro del marco del conflicto armado interno, se presentaron ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Estado, las cuales fueron ratificadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “Caso Villamizar Durán y otros vs Colombia”.

Así entonces, el punto 5 del Acuerdo Final para la paz, desarrolla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el objetivo garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, consolidar la paz y contribuir a la reconciliación de toda

---

población la que le otorga dicho poder. Así entonces, si la población no está conforme con los mandatos del Estado, puede exigir el retiro de este y que de esa manera se encuentre un coherente ejercicio por parte de un nuevo Gobierno estatal. Dichas exigencias son realizadas por consultas populares, referendos o incluso los actos de las guerrillas.



la nación. A través de este sistema, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)<sup>8</sup> estableció medidas restaurativas y reparatoras que atienden las necesidades y la dignidad de las víctimas para garantizar el derecho a la verdad plena, a la justicia, la reparación y la no repetición, y busca el reconocimiento de responsabilidad de quienes participaron en el conflicto armado interno, dando aplicación de las sanciones retributivas.

En el momento en el que una víctima acuda a la Jurisdicción Especial para la Paz, y sea reconocida como titular de los derechos, tendrá derecho del debido proceso; entre los que se encuentran: ser reconocida como víctima, aportar pruebas, recibir asesoría, orientación, representación judicial, acompañamiento psicológico, ser tratadas con justicia, dignidad y respeto, ser informadas del avance de la investigación y del proceso, ser informadas a tiempo para las audiencias y a intervenir en ellas, audiencias que podrán ser públicas en presencia de víctimas individuales o colectivas, sin perjuicio de que dicho reconocimiento se realice por escrito (Congreso de la República, Ley 1957 de 2019, art. 15).

Este derecho tiene herramientas que permiten la lucha contra la impunidad, desarrollando un modelo de justicia transicional, existan instrumentos que propendan por la reconciliación entre las víctimas y los victimarios (Cáceres, 2013).

En palabras del jurista Pablo de Greiff (2011) es:

(...) todas aquellas medidas que se pueden adoptar para resarcir los diversos tipos de daño que puedan haber sufrido las víctimas como consecuencia de ciertos crímenes. (p. 409)

De acuerdo por lo interpretado por el jurista Pablo de Greiff, se generan todo tipo de retos al interior de un Estado, puesto que en el caso colombiano, al haber sido un conflicto armado

---

<sup>8</sup>Es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años.

La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.

El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP sería voluntaria. (JEP, s.f.)

con más de 50 años de historia, las medidas de reparación a las víctimas deben solventar la incompetencia que se tuvo anteriormente para resolver el conflicto, de la misma manera, el Estado debe crear una pedagogía que le permita a las futuras generaciones conocer de la historia del conflicto armado así como del proceso de paz, con el objetivo que no vuelva a ocurrir las circunstancias que motivaron el comienzo del conflicto.

En el punto 5.1.3.2 del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno Nacional se comprometió a promover la participación de los ex integrantes de las FARC-EP en las diferentes medidas de reparación, las cuales quedaron pactas así:

(...) a realizar acciones de contribución a la reparación por los daños causados que podrán incluir entre otras, la participación de obras de reconstrucción de infraestructura en los en los territorios más afectados por el conflicto, la participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG), la participación en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto, y la participación en programas de reparación del daño ambiental, como por ejemplo la reforestación. (JEP, s.f.).

#### **4.2. Derecho a la verdad**

Este derecho tiene una dimensión tanto individual como colectiva, porque las víctimas (en especial los familiares) pueden llegar a conocer los hechos de lo ocurrido, que dieron lugar a la comisión del delito por parte del victimario. en cuanto a la dimensión colectiva, le permite a la sociedad conocer los hechos y motivos por los que los victimarios lesionaron los bienes jurídicos de los más vulnerables y así poder evitar que se vuelva a presentar (Barón, 2018).

La Comisión de la Verdad, es un organismo que permite la interacción con todas las partes del conflicto para que tenga un control sobre lo manifestado (Sánchez, 2018). Esto permite un ejercicio eficaz en la administración de justicia por parte del Estado porque permite investigar, juzgar y sancionar a los responsables, lo que ocasiona que se reduzca la impunidad que se pueda llegar a presentar en los eventos de la comisión de delitos años atrás.

Al analizar el Derecho a la Verdad, no se puede dejar de un lado el reconocimiento de la memoria; puesto que este al encontrarse en la justicia transicional le permite al Estado no olvidar lo sucedido, preservando así la historia de las víctimas del conflicto que sufrieron las acciones o las omisiones del Estado (Zambrano, 2016) así como de los grupos al margen de la ley. Esto no con la finalidad de revictimizar a los afectados sino para brindar soluciones y evitar que vuelva a suceder

Sin embargo, el derecho a la verdad se encuentra afectado por la sistematización que se presentó con la Ley de Justicia y Paz, la acción de confesar o aceptar la versión libre de los victimarios, no fue del todo acorde con lo esperado, por cuanto lo que se presentó fue la revictimización de los afectados por la ausencia de empatía o compasión del sujeto compareciente (Palou, 2018).

El derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer toda la verdad sobre los sucesos ocurridos es un elemento esencial en un proceso de justicia transicional y de reconciliación. El conocimiento que proporciona la verdad tiene que ir acompañado de reconocimiento a las víctimas. La verdad no se tiene que quedar en el círculo más íntimo de las víctimas, sino que tiene que ser reconocida oficial y públicamente, elevando así su validez al público y a la sociedad en su conjunto (Gómez, 2014).

En el caso de Colombia, el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño es sumamente importante para lograr un proceso de paz exitoso. Es necesario que los perpetradores del daño le presenten a las víctimas del conflicto un cierre para el dolor vivido, y esto no será posible de ninguna manera si el Estado no formula políticas públicas para lograrlo por parte del Estado; la verdad no es opcional, los victimarios deben reparar de manera integral a las víctimas, y si no lo hacen no tendrán la oportunidad de solicitar la amnistía o indulto respecto a los crímenes cometidos. Si la JEP yerra al pasar a un segundo plano la verdad, más temprano que tarde todas las medidas normativas y los intentos por lograr la paz se verán truncados por una reparación inconclusa.

#### **4.3. Derecho a la justicia**

El derecho a la justicia en el marco de un sistema de justicia transicional se encuentra en una categoría distinta a la justicia ordinaria, porque esta le exige mayores garantías al Estado

con las víctimas. El objetivo es reconstruir la sociedad y buscar la verdad material y procesal sobre los hechos ocurridos (Cáceres, 2013).

Este derecho hace parte tanto de las víctimas como de los victimarios, el Estado debe garantizar medidas eficaces que propendan por la protección de los derechos de los involucrados, al reconocer a las víctimas e imponiendo las respectivas sanciones a los victimarios, para establecer la seguridad jurídica, de lo contrario existiría el riesgo de desarrollar la impunidad a los derechos vulnerados de las víctimas (Sánchez, 2018).

Mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, el Congreso de la República reguló el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) en este se encuentran componentes como: la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz, siendo este su componente de justicia al que deben acudir las partes del conflicto para la defensa de los derechos en el caso de ser víctimas y en el juicio y sanción en el caso de ser victimarios; y el último componente, las medidas de reparación integral para la construcción de paz y garantías de no repetición (Jaime, Casadiegos y Carrascal, 2019). El objetivo principal de la JEP es:

Adoptar las decisiones que otorguen plena seguridad jurídica quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto interno armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón del mismo, en particular aquellos que constituyan graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos (Flórez, Luna y Perona, 2019, p. 535).

## **5. Los deberes de los comparecientes y del Estado colombiano**

Se entiende por compareciente: aquella persona que se ha desmovilizado del grupo armado al margen de la ley en el que se encontraba y que se acogió voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos de paz, en donde el Estado debe garantizar los derechos de las víctimas a través del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR).

Los deberes que tienen los comparecientes con las víctimas y el Estado se encuentran ligados con los beneficios de la amnistía e indulto establecidos (Ríos, 2017), puesto que de

encontrarse diferencias entre lo manifestado y lo investigado por el Tribunal para la Paz, el competente para dirimir su situación jurídica no será la JEP sino la Jurisdicción Ordinaria.

Para poder cumplir con el término de la Jurisdicción Especial para la Paz, el acuerdo final de paz estableció 15 años de funcionamiento de la JEP, prorrogables por 5 años más. Dentro de este tiempo los comparecientes deben rendir una versión individual y colectiva ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP (JEP, s.f.). Sin embargo, es importante reconocer que el deber de expresar la verdad sobre hechos ocurridos: este no constituye en sí mismo la aceptación de responsabilidad por los mismos (Congreso de la República, Ley 1822 de 2018, art. 1). Este reconocimiento permite determinar que los comparecientes se contemplen como miembros de la población colombiana, reconociendo el derecho fundamental del debido proceso, para que de esa manera puedan tener un ejercicio efectivo de la defensa y contradicción de las pruebas.

En el caso de las obligaciones de los dirigentes de la organización desmovilizada (antigua FARC EP) deberán establecer un programa de capacitación en el que se le informen a los integrantes cómo será su proceso de reincorporación a la vida civil, garantizando con ello el cumplimiento de los acuerdos de paz (Acuerdo Final de Paz, 2016).

El Estado tiene obligaciones con respecto a las víctimas y los comparecientes entre los que se encuentran “la adopción de un nuevo estatuto de la oposición, la reforma electoral, la adopción de mecanismos y tribunales para reducir el fraude en los sitios de mayor riesgo” (Melo, 2016, p. 321). Debido a que el conflicto armado colombiano surgió por el silencio generado a los diferentes grupos poblacionales que no se encontraban acorde a las ideas de los dos grandes partidos tradicionales (Liberal y Conservador) (Bello, 2008), el Estado se ha comprometido a garantizar la no repetición de dicha censura en donde se garanticen los derechos políticos de toda la ciudadanía colombiana.

A su vez el Estado tiene el deber de respetar los derechos de la población víctima del conflicto armado, así que el haber reconocido tratados internacionales como el Estatuto de Roma se encuentra en el deber legal de respetar dicha normatividad internacional la cual resulta ser el principal instrumento del Derecho Penal Internacional (Melo, 2016).

Sin embargo, las obligaciones que adquirió el Estado no resultan ser proporcionalmente mayores, por cuanto este es un tipo de Estado Social de Derecho, con las obligaciones de

reconocer, proteger y defender los derechos fundamentales, los económicos sociales y culturales, los ambientales y de brindarles a cada uno de esos mecanismos por los cuales sea permitido acceder a la administración de justicia para obtener una reparación (Const. 1991. Preámbulo, art. 1 y 2.

Mucho se ha comentado sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de paz, puesto que este no resulta ser un tratado internacional, por lo que las partes firmantes no son Estados, sino que uno es un Estado y el otro una guerrilla, por lo tanto, a interpretación del Convenio de Viena de 1969, carecería del obligatorio cumplimiento de las partes por no ser entre Estados. (Amaya y Guzmán, 2017). Sin embargo, el Acuerdo Final de Paz, consagra la figura de “Acuerdo Especial de Derecho Internacional Humanitario”, lo cual significa que es un tipo de acuerdo sobre cualquier cuestión que parezca pertinente par definir una situación en particular, aclarando que estos no perjudicarán la situación de las personas protegidas (Pavlovich, 2013)

### **Conclusiones.**

Las luchas que se generaron en Sudán del Sur e Irlanda del Norte se dieron por la búsqueda permanente del bienestar y defensa de los derechos de la comunidad, para no tener que vivir en la misma situación de inestabilidad política, jurídica, económica y social, por ello la esperanza del pueblo en la implementación del modelo de justicia transicional, para encontrar la solución a los conflictos. Sin embargo, el proceso que vivieron estos países presenta que la implementación y desarrollo de las medidas jurídicas de amnistía e indulto; ocasionaron la falta de garantías para las víctimas y la impunidad por la falta de investigación en el posconflicto.

En Colombia, la amnistía y el indulto se encuentran protegidas por el bloque de constitucionalidad (CADH, Convención de Viena de 1969, Estatuto de Roma), toda vez que al ser relacionadas con el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional se encuentran ampliamente ligadas con lo descrito en los convenios internacionales firmados, los cuales hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, donde el fundamento del derecho internacional se encuentra en El artículo 6° del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, que precisa algunos mandatos aplicables en las diligencias penales adelantadas por la comisión de las conductas prohibidas; el numeral 5° de este artículo señala

que al fin de las hostilidades se concederá la amnistía más amplia posible. Esta directriz, sin embargo, y de conformidad con la doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no debe impedir la investigación, juzgamiento y la aplicación de sanciones a quienes hayan cometido crímenes de guerra, además también están protegidas en la legislación nacional (Ley 975 de 2005, Ley 1448 de 2011 y Ley 1820 de 2016) la jurisprudencia y los organismos a los que se suscribió el Estado.

De la experiencia de Sudán del Sur se concluye que la respuesta a la terminación de un conflicto armado no son las amnistías e indultos concedidos, sino la satisfacción en la protección y defensa de las víctimas. Desde la firma del Acuerdo Global de Paz en el año 2005 a Sudán del Sur le costó iniciar la etapa del posconflicto, no solo por el descontento de la comunidad con los beneficios otorgados a los victimarios (amnistías e indultos), sino también, por la falta de recursos para mantener la protección y defensa de las víctimas en el marco de los acuerdos. Luego que Sudán del Sur proclamó su independencia en el año 2011, sigue sin tener claridad sobre la reinserción de los desplazados internos y refugiados que regresaron al país para ese entonces, y de la protección de estas comunidades.

El proceso de paz de Irlanda del Norte duró más de 20 años; una de las decisiones más criticadas por la población y que marcó contundentemente el proceso de paz, no fueron las medidas jurídicas concedidas a los victimarios, fue cuando el Estado ordenó ponerle fin a la investigación por los crímenes ocurridos 30 años atrás desde 1960, afectando gravemente las garantías de las víctimas. De acuerdo con Sonja Ann Hyland, otro hecho importante del proceso es que aún no se declaran los derechos a la verdad, la justicia y reparación a las víctimas dentro del acuerdo; sin embargo, la estabilidad del territorio se encuentra en mejora, y aunque quedan puntos del acuerdo por cumplir, el trabajo se está realizando continuamente y la comunidad le sigue apostando al camino por la paz con el fin de no reincidir en el conflicto.

En Colombia, han transcurrido 4 años desde que el Gobierno de Colombia suscribió el Acuerdo para la Terminación Definitiva del conflicto con las FARC-EP; en el año 2018 se puso en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz, un modelo de justicia transicional, con el objetivo de administrar justicia restaurativa y contribuir con la terminación del conflicto en donde han comparecido voluntariamente un alto número de desmovilizados y el número reconocido de víctimas ha ido aumentando.

En el 2019, se perpetraron alrededor de 16.500 decisiones judiciales, creando un precedente en esta jurisdicción; fueron expulsados de la JEP dos negociadores de las FARC-EP por el incumplimiento del acuerdo; la JEP hace presencia en gran parte del territorio nacional, cuenta con alrededor de 138 profesionales que asesoran y apoyan a las víctimas y comparecientes, desarrollando la justicia restaurativa en los territorios más afectados por la guerra, también, tiene convenios y acercamientos con organizaciones internacionales, sociales, academia nacional e internacional con quienes trabaja de la mano punto por punto el acuerdo de paz; por último y no menos importante, para el año 2020 la JEP implementó los lineamientos en materia de sanción propia y Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador - Restaurador con el fin de contribuir a la reparación de las víctimas, la reintegración de los compareciente y garantizar la no repetición. Así la JEP actualmente ha dado cumplimiento de los acuerdos pactados.

Con lo anteriormente observado, se determina que, las medidas jurídicas de amnistía e indulto son necesarias para la negociación de cualquier proceso de paz, toda vez que, como en cualquier negociación las partes buscan un beneficio propio.

La investigación deduce que, en los acuerdos de Sudán del Sur, Irlanda del Norte y Colombia, la amnistía y el indulto no son una garantía para el desarrollo del proceso de paz; tampoco garantizan la terminación definitiva del conflicto; el éxito del acuerdo de paz no está en la adopción de estas medidas jurídicas. Por lo contrario, está en las garantías, protección y defensa de los derechos de las víctimas, en aportes voluntarios de la verdad, de la justicia de la reparación a las víctimas y de la garantía de no repetición por parte de los excombatientes.

## **REFERENCIAS**

### **Doctrina**

- Alba, A. Suarez, B. y Jaramillo, F. (2016). Estudio del Caso: Sudán del Sur. En Barreto, M. (Editor Académico). Experiencias internacionales de Paz Lecciones aprendidas para Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad Tadeo.
- Amaya, A., y Guzmán, V. (2017). La naturaleza jurídico-internacional de los acuerdos de paz y sus consecuencias en la implementación. Revista colombiana de Derecho Internacional 30, pp. 41 – 60. Doi:10.11144/Javeriana.il15-30.njia.



- Barón, G. (2018). Justicia transicional como trasplante jurídico. En Velandia, A. (Director Científico) Derecho procesal constitucional: Garantía jurisdiccional de la Constitución (pp. 538 – 554) Bogotá: VC Editores.
- Bello, C. (2008). La violencia en Colombia: Análisis histórico del homicidio en la segunda mitad del siglo XX. *Revista Criminalidad* 50(1), pp. 73 – 84.
- Cáceres, E. (2013). Justicia transicional y derecho a la reparación integral aproximación al caso colombiano. *Novum Jus*, 7(2), 55-87.  
<https://doi.org/10.14718/NovumJus.2013.7.2.2>.
- Caira, R. (2007). El acuerdo de viernes santo y derechos humanos. Cuadernos Deusto de derechos humanos, 45. Bilbao. Universidad de Deusto.
- Correa, C. (2011). Programas de reparación para violaciones masivas de derechos humanos: lecciones de las experiencias de Argentina, Chile y Perú. En *Justicia Transicional: Manual para América Latina*. (pp. 441 – 476). ICTJ.
- Cubides, J., Barreto, P., y Fajardo, A. (2018). La incidencia del control de convencionalidad (CCV) en la justicia transicional implementado en Colombia. En Velandia, A. (Director Científico) *Derecho procesal constitucional: Garantía jurisdiccional de la Constitución* (pp. 397 – 407) Bogotá: VC Editores.
- Cuervo, B; Molina, P; Torres, D; Casallas, A; Rodríguez, J. (2014) Origen y fundamentos de la justicia transicional. *Vínculos* 11 (1), pp. 124 – 161.
- De Greiff, P. (2011). Justicia y reparaciones. En *Justicia Transicional: Manual para América Latina*. (pp. 407 – 440) ICTJ.
- Díez, J. (2016). Sudán del Sur, ¿insuperables obstáculos y desafíos para la paz? Instituto Español de Estudios Estratégicos. Recuperado de: <http://www.ieee.es/contenido/noticias/2016/03/DIEEEO24-2016.html>.
- Dodds, N. (2001). La creación de un marco de negociación: Inquietudes unionistas. En: *Haciendo Balance del proceso de paz de Irlanda del Norte*. Centro de Investigación por la paz Gernika. Bizkaia. España.
- Gago, E. (2016). Estudio del Caso: Irlanda del Norte. En Barreto, M. (Editor Académico). *Experiencias internacionales de Paz Lecciones aprendidas para Colombia*. Bogotá, Colombia: Universidad Tadeo

- García, J. (2018). Los debates de la justicia transicional en Colombia. En Peñuela, S., Gutiérrez, E y Zapata, M (editores académicos). Retos de la implementación de la justicia transicional en Colombia. (pp. 29 - 44). Bogotá: Universidad Pontificia Javeriana.
- González, R. (2015). Análisis del proceso de paz en Irlanda del Norte. Reflexiones sobre su alcance para el abordaje del proceso de paz colombiano. (Tesis de maestría). Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Gómez, F. (2014). *Justicia, verdad y reparación en el proceso de paz en Colombia*. Revista Derecho del Estado No.33., pp. 35-63.
- Güiza, D. (2018). Recordar, renovar y reconciliarse para la paz, las enseñanzas de Irlanda del Norte. *Dejusticia*. Recuperado de: <https://www.dejusticia.org/column/recordar-renovar-y-reconciliarse-para-la-paz-las-ensenanzas-de-irlanda-del-norte/>.
- Henao, J. (2015). Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el Estado. *Revista De Derecho Privado*, (28), 277-366. <https://doi.org/10.18601/01234366.n28.10>.
- Herrera, W. y Bello, G. (2010) El proceso de paz en Irlanda del Norte: Un modelo de justicia transicional desde abajo. En De Gamboa, C. (editora académica). El tránsito hacia la paz: de las herramientas nacionales a las locales. Estrategias de la transición en cinco países y en tres ciudades colombianas (pp. 97 – 141). Colombia. Universidad el Rosario
- Jaime, L., Casadiegos, M y Carrascal, A. (2019). Corte Penal Internacional y Jurisdicción Especial para la paz. En Velandia, A y Trujillo, L (directores científicos). La Constitucionalización del ordenamiento jurídico. (pp. 663 – 678) Bogotá: VC Editores.
- Londoño, M. (2007). Deberes y derechos procesales en el estado social de derecho. *Opinión Jurídica*, 6(11), 69-86. Recuperado de: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1692-25302007000100004&lng=en&tlng=es](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25302007000100004&lng=en&tlng=es).
- Mansergh, M. (2001). Primeras fases del proceso de paz irlandés. En: Haciendo Balance del proceso de paz de Irlanda del Norte. Centro de Investigación por la paz Gernika. Bizkaia. España.
- Mantilla, J. (2014). El acuerdo de viernes santo o la paz como nuevo diseño institucional compartido: Lecciones del proceso de paz en Irlanda del Norte. Documentos de

- Políticas Públicas. Centro de pensamiento y seguimiento al Dialogo de Paz. Universidad Nacional. Bogotá. Colombia.
- Martín, C y Páez, D. (2000). Violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción social: Experiencias internacionales y el desafío vasco. España: Editorial Fundamentos.
- Martínez, C. (2017). La reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia en el marco de la justicia transicional. (Tesis de Doctoral). Universidad Complutense de Madrid. España.
- Melo, J. (2016). Resumen del acuerdo de paz. Revista de Economía institucional, 18(35), pp. 319 – 337. <https://dx.doi.org/10.18601/01245996.v18n35.19>
- Méndez, P. (2004). Irlanda del Norte: historias de guerra y paz. España: Libros en Red. Recuperado de <https://books.google.com.co/books?id=MLn1ViDpg9QC&printsec=frontcover&dq=conflicto+armado+en+irlanda+del+norte&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi-goao85TaAhXkw1kKHahMCPwQ6AEIJjAA#v=onepage&q=conflicto%20armado%20en%20irlanda%20del%20norte&f=false>.
- Monroy, M. (2017). La transición de Irlanda del Norte del conflicto al postconflicto guía para otras latitudes. InterNaciones, 4(10), 31-52.
- Nash, C. (2018). Justicia transicional y los límites de lo (posible) punible. Reflexiones sobre la legitimidad del proceso de paz en Colombia. Opinión Jurídica, 17(35), 19-41. <https://doi.org/10.22395/ojum.v17n35a1>.
- Observatorio de Justicia Transicional. (2015). SUDÁN DEL SUR: La Unión Africana concluye que tanto el Gobierno como los grupos armados cometieron crímenes de guerra. Observatorio de Justicia Transicional 34. Recuperado de: [https://escolapau.uab.cat/transitional/34e\\_jt.html](https://escolapau.uab.cat/transitional/34e_jt.html).
- Observatorio de Paz y Conflicto. (2016). Amnistía e indulto. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH. (2009). Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto, Amnistía. Nueva York y Ginebra. Naciones Unidas.
- Palou, J. (2018). Memoria y justicia transicional en los acuerdos de paz de Colombia. Novum Jus, 12(2), 113-127. DOI: 10.14718

- Pavlovich, G. (2013) El acuerdo especial humanitario frente al derecho internacional humanitario. *Revista Justicia Iuris*. 9(1), pp. 48 – 55.
- Ramírez, G. (2017) *Los derechos humanos a debate: Perspectivas sobre los derechos humanos*. Bogotá, Colombia: Universidad Católica de Colombia.
- Ríos, J. (2017). El Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC: o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta. *Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, 19(38), pp. 593 – 618.
- Sánchez, L. (2011). Perspectivas jurídicas frente a un eventual proceso de paz con los grupos guerrilleros. Bogotá, Corporación Derechos para la Paz., p.9.
- Sánchez, J. (2018). Justicia transicional y control de convencionalidad: Posición jurisprudencial de la Corte Interamericana frente a la verdad, la justicia y la reparación. En Velandia, A. (Director Científico) *Derecho procesal constitucional: Garantía jurisdiccional de la Constitución* (pp.375 – 396) Bogotá: VC Editores.
- Saumeth, E. (2011) Historia de la guerrilla en Colombia. En *História, Militar, Defesa, Estratégia, Inteligência e Tecnologia*. Recuperado de [http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/index.php?option=com\\_search&Itemid=99999999&searchword=historia+de+la+guerr&submit=Pesquisar&searchphrase=exact&ordering=newest](http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/index.php?option=com_search&Itemid=99999999&searchword=historia+de+la+guerr&submit=Pesquisar&searchphrase=exact&ordering=newest).
- Tafur, C. (2016). *Precedente jurisprudencial en materia de justicia transicional*. Bogotá, Colombia: Universidad Católica de Colombia.
- Tirado, M y Ramírez, G. (2016). La justicia transicional y el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En *Análisis y aplicación de los derechos humanos en el contexto de la Corte Interamericana*. Bogotá, Colombia. Universidad Católica de Colombia.
- Torres, J. (2017) La memoria histórica y su protección: una mirada comparada. En *Análisis y aplicación de los derechos humanos en el contexto de la Corte Interamericana*. Bogotá, Colombia. Universidad Católica de Colombia.
- Universidad Eafit. (2017). *Gerencia social. Hacia la gobernanza colaborativa: Las empresas en la construcción de paz. Misión académica Irlanda del Norte y República de Irlanda*. Colombia: Universidad Eafit.

- Vallejo, G. (2015). las operaciones de mantenimiento de paz: compatibilidad de la figura frente al ordenamiento jurídico colombiano y sus escenarios de aplicación en los actuales diálogos de paz. En: Las operaciones de paz de la ONU: una opción para el caso colombiano. Bogotá. Universidad Católica de Colombia.
- Vélez, L. (2015). Justicia Transicional en Colombia: hacer justicia o negociar la paz. Estudio comparativo. Cuadernos de Derecho Penal. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.
- Wabgou, M. (2013). Experiencias postconflicto de países africanos: justicia transicional en Ruanda. *Novum Jus*, 7(1), 31-49. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2013.7.1.2>.
- Zambrano, G. (2016). Memoria y reparación: el camino de la justicia transicional para las víctimas. En *Análisis y aplicación de los derechos humanos en el contexto de la Corte Interamericana*. Bogotá, Colombia. Universidad Católica de Colombia.

### **Jurisprudencia**

- Corte Constitucional. (13 de septiembre de 2012) Sentencia C 712 [M.P. Luís Ernesto Vargas].

### **Legislación**

- Acuerdo de Addis Abeba. (17 de agosto de 2015). Agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan. Recuperado de: <https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Agreement%20on%20the%20Resolution%20of%20the%20Conflict%20in%20the%20Republic%20of%20South%20Sudan.pdf>.
- Congreso de Colombia. (26 de mayo de 1873). Artículo 946. [Título XII] *Código Civil*. [Ley 84 de 1873]. DO: 2.867.
- Congreso de Colombia. (30 de diciembre de 2016). Artículo 5. *Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones*. [Ley 1820 de 2016]. DO. 50.102.
- Congreso de Colombia. (04 de abril de 2017). Artículo transitorio 1. *Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones* [Acto legislativo 01 de 2017]. DO: 50.196.

Congreso de Colombia. (18 de julio de 2018). Artículo 1. *Por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz*. [Ley 1922 de 2018]. DO. 50.658.

Congreso de Colombia. (06 de junio de 2019). Artículo 15. *Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz*. [Ley 1957 de 2019]. DO. 50.976.

Constitución Política de Colombia [Const.] (1991). Artículo 1. [Título I] Recuperado de: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)

Gobierno de Colombia. (12 de noviembre de 2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Punto 3.3. Recuperado de: [https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11\\_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf).

Irlanda. (20 April 1998). The Belfast Agreement. Article 12. Recuperado de: <https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement>.

Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana de los Derechos Humanos. Artículo 33. Recuperado de: [https://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm).

### **Recursos electrónicos**

ABC Internacional (31 de enero de 2009). El proceso de paz en Irlanda del Norte. Recuperado de: [https://www.abc.es/internacional/abci-proceso-irlanda-norte-200901310300-912829568281\\_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](https://www.abc.es/internacional/abci-proceso-irlanda-norte-200901310300-912829568281_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F).

Aguilera, M. (s.f.). Amnistía e indultos, siglos XIX y XX. Banco de la República. Recuperado de: <https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-137/amnistia-e-indultos-siglos-xix-y-xx>.

Amnistía Internacional. (20 de noviembre de 2013). Una amnistía general supondría una traición absoluta a las víctimas. Recuperado de: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/una-amnistia-general-supondria-una-traicion-absoluta-a-las-victimas/>.

Amnistía Internacional. (07 de octubre de 2019). Sudán del Sur: El deficiente sistema de justicia y las amnistías generales alientan la impunidad por los crímenes de guerra. Recuperado de: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/sudan-del-sur-el-deficiente-sistema-de-justicia-y-las-amnistias-generales-alientan-la-impunidad-por-los-crimes-de-guerra/>.

estamos/noticias/noticia/articulo/sudan-del-sur-el-deficiente-sistema-de-justicia-y-las-amnistias-generales-alientan-la-impunidad-por/.

Amnistía Internacional. (08 de octubre de 2019). South Sudan: "Do you think we will prosecute ourselves?" No prospects for accountability in South Sudan. Recuperado de: [https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=\\*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=\\*&fo=and&fq=mssearch\\_fld13&fv=AFR65110519&fo=and&fq=mssearch\\_mlt98&fv=gseg01&fo=and](https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=AFR65110519&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and).

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (s.f.) Sudán del Sur independencia, guerra y paz frágil. Recuperado de: <https://www.icrc.org/es/sudan-del-sur-independencia-guerra-y-paz-fragil>.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC EP). (s.f.). Quienes somos y por qué luchamos. Recuperado de: <https://www.farc-ep.co/nosotros.html>.

Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. (s.f.). ¿Qué es la JEP? Recuperado de: <https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Jurisdicion-Especial-para-la-Paz.aspx>.

Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. (s.f.). versiones dentro del caso 001, basado en el informe de la fiscalía general de la nación, denominado “retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP”. Recuperado de: <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Gu%C3%ADa-para-entender-las-versiones-en-la-JEP.aspx>.

Justicia Transicional. (s.f.). Justicia Transicional en Colombia. Recuperado de: <http://www.justiciatransicional.gov.co/Justicia-Transicional/Justicia-transicional-en-Colombia>.

Salazar, S. (25 de junio de 2017). El desarme del IRA se demoró siete años. Colombia check. Recuperado de: <https://colombiacheck.com/chequeos/el-desarme-del-ira-se-demoro-siete-anos>.

Scott, K. (29 de abril de 2016). El gobierno de unidad de Sudán del Sur, una oportunidad para garantizar justicia por posibles crímenes de guerra. Amnistía Internacional. Recuperado de: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/04/south-sudan-unity-government-a-chance-to-ensure-justice-for-possible-war-crimes/>.

Unidad de víctimas. (s.f.) Reparación integral individual. Recuperado de:  
<https://www.unidadvictimas.gov.co/es/repuracion-integral-individual/286>.